



INFORME JURÍDICO SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL MARCO NORMATIVO PARA LOS PROYECTOS BILINGÜES Y PLURILINGÜES EN LAS ETAPAS EDUCATIVAS NO UNIVERSITARIAS EN CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA.

Analizado el proyecto de decreto remitido, esta asesoría jurídica informa:

PRIMERO. Se emite este informe con el carácter de facultativo y no vinculante, de conformidad con lo establecido en el artículo 11,1, b) de la Ley 5/2013, de 17 de octubre, de ordenación del servicio jurídico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

SEGUNDO. La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha tiene la competencia para abordar la iniciativa objeto de examen, en virtud de lo establecido en el artículo 37, apartado 1 de su Estatuto de Autonomía, que otorga a la Junta de Comunidades " la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la constitución y leyes orgánicas que conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma lo desarrollen y sin perjuicio de las facultades que atribuye al Estado en el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la Alta Inspección para su cumplimiento y garantía".

Y en la administración regional, corresponde a la Consejería de educación, cultura y deportes diseñar y ejecutar la política regional en materia educativa, universitaria,..., conforme a los acuerdos del Consejo de Gobierno y a la legislación vigente, según dispone el artículo 1 del Decreto 108/2023, de 25 de julio, de estructura orgánica y distribución de competencias de la consejería.

TERCERO. El marco normativo de la regulación proyectada figura en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los reales decretos por los que establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de las distintas etapas educativas y los decreto de autonómicos por los que se aprueban los currículos de las mismas.

CUARTO. El texto remitido consta de un título, un preámbulo, una parte dispositiva estructurada del modo siguiente:

CAPÍTULO I. Objeto y ámbito de aplicación.

Artículo 1. Objeto.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

CAPÍTULO II. Consideración de proyectos bilingües y plurilingües. Autorización, incorporación por cursos, modificación, abandono y revocación.

Artículo 3. Proyectos bilingües.

Artículo 4. Proyectos plurilingües.

Artículo 5. Autorización de proyectos e incorporación por cursos.

Artículo 6. Modificación de proyectos.

Artículo 7. Abandono de proyectos.

Artículo 8. Revocación de la autorización.

CAPÍTULO III. Principios metodológicos y estructura de los proyectos en las diferentes etapas educativas.

Artículo 9. Metodología.

Artículo 10. Porcentaje de impartición en inglés en los proyectos bilingües en Educación Infantil y Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

Artículo 11. Porcentaje de impartición en idiomas distintos del inglés en los proyectos bilingües en Educación Infantil y Primaria, en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

Artículo 12. Porcentaje de impartición en idiomas en los proyectos plurilingües en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

Artículo 13. Horas de impartición en lengua extranjera de los proyectos en Formación Profesional.

Artículo 14. Ampliación del horario del centro en Educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato.

Artículo 15. Oferta de áreas, materias y módulos profesionales.

CAPÍTULO IV. Alumnado participante.

Artículo 16. Alumnado participante en Educación Infantil y Primaria.

Artículo 17. Alumnado participante en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional.

Artículo 18. Permanencia o abandono del proyecto por parte del alumnado.

Artículo 19. Agrupación de alumnado.

Artículo 20. Actividades educativas y de inmersión lingüística para el alumnado.

Artículo 21. Prueba de certificación de competencia lingüística.

CAPÍTULO V. Profesorado y plantillas.

Artículo 22. Profesorado implicado en los proyectos bilingües o plurilingües.

Artículo 23. Coordinación lingüística.

Artículo 24. Competencia comunicativa del profesorado. Otros requisitos de formación.

Artículo 25. Reconocimiento y certificación.

Artículo 27. Dotación extraordinaria.

CAPÍTULO VI. Evaluación.

Artículo 28. Evaluación del alumnado.

Artículo 29. Expediente del alumnado.

Artículo 30. Evaluación interna.

Artículo 31. Evaluación externa.

Artículo 32. Coordinación de centros.

CAPÍTULO VII. Plan de formación específico de lenguas extranjeras.

Artículo 33. Definición.

Artículo 34. Acciones formativas.

Artículo 35. Objetivos y tipología de acciones formativas.

Artículo 36. Gestión de acciones formativas.

CAPÍTULO VIII. Internacionalización.

Artículo 37. Internacionalización.

Disposición adicional primera. Convenios específicos.

Disposición adicional segunda. De los centros docentes privados concertados.

Disposición derogatoria. Derogación normativa

Disposición final primera. Desarrollo normativo

Disposición final segunda. Entrada en vigor

Fecha y firmas de las autoridades competentes.

QUINTO. Examinado el texto se realizan las observaciones siguientes:

-Al Preámbulo:

Debe incorporarse en el preámbulo una referencia a la competencia estatutaria de la Comunidad autónoma en la materia de educación. Se sugiere este texto: "Corresponde a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en virtud de lo establecido en el artículo 37.1 del Estatuto de Autonomía, aprobado por la Ley Orgánica 9/1982, de 19 de agosto, la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y las leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen y sin perjuicio de las facultades que atribuye al Estado en el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la Alta Inspección para su cumplimiento y garantía. " Así mismo, debe incorporarse al



preámbulo un párrafo sobre el cumplimiento de los principios de buena regulación normativa previstos en el artículo 129 de la ley 39/2015, de 1 de octubre. Se sugiere este texto:” El presente decreto se adecúa a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En lo que se refiere a los principios de necesidad y eficacia, se trata de una norma necesaria para la regulación de las enseñanzas idiomas conforme a la nueva redacción de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, tras las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre y en los reales decretos que establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de las etapas de educación infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. De acuerdo con el principio de proporcionalidad, contiene la regulación imprescindible de la estructura de estas enseñanzas al no existir ninguna alternativa regulatoria menos restrictiva de derechos.

Conforme a los principios de seguridad jurídica y eficiencia, resulta coherente con el ordenamiento jurídico y permite una gestión más eficiente de los recursos públicos. Cumple también con el principio de transparencia, ya que identifica claramente su propósito y durante el procedimiento de elaboración de la norma se ha permitido la participación activa de los potenciales destinatarios a través del trámite la información pública previa, proceso participativo, y la intervención de los órganos colegiados consultivos específicos en la materia.”

En el párrafo undécimo, referido a la educación infantil, el real decreto que regula la etapa no dispone que” podrán establecer el uso de metodologías de aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras sin que ello suponga modificación de los aspectos básicos regulados en dicho real decreto, pero garantizando igualmente que a lo largo de la etapa el alumnado desarrolle de manera equilibrada su competencia en las distintas lenguas”, el artículo 6, apartado 8, del Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil, dispone que las administraciones educativas fomentar una primera aproximación a la lengua extranjera en los aprendizajes del segundo ciclo de la Educación Infantil, especialmente en el último año. Se sugiere que se incluya la referencia a este artículo y a su contenido.

En el párrafo de enlace entre la parte expositiva y la dispositiva, la referencia al Consejo Consultivo debe completarse con la término “oído” y un vez emitido el dictamen y en función del tratamiento que se den a las observaciones formuladas, el órgano competente optará por una u otra

- A la parte dispositiva.

-Al artículo 1. El primer apartado carece de contenido dispositivo por lo que debe suprimirse.

-Al título del capítulo II. Se sugiere la supresión del término “ consideración” con el que comienza este.

- Así mismo se sugiere que se sustituya en los artículo 3 y 4 la expresión tendrá “la consideración..” por “ a los efectos de este decreto son proyectos ... “

-Al artículo 5. Se debería regular el procedimiento de autorización, quién solicita la autorización, quién autoriza, los titulares de los centros privados concertados o los directores de los centros educativos públicos. El apartado 3 del artículo 5 no tiene relación con el contenido del artículo. S

-Al artículo 6, se reitera lo manifestado al artículo 5,

En el apartado 2, no sigue la misma sistemática que para el procedimiento de autorización, que prevé que para la educación infantil y primaria la solicitud de autorización debe efectuarse de manera conjunta.

-Al artículo 7, se reitera lo manifestado al artículo 6.

-Al artículo 8, se reitera lo manifestado a los anteriores artículos, Además, se mencionan unos requisitos que no figuran en el proyecto de decreto que se informa. En todo caso, debe garantizarse en la tramitación del procedimiento la audiencia a los centros afectados.

-Al artículo 24, apartado 3, Debería especificarse en el texto, por razones de seguridad jurídica, cuales son las excepciones que afectan al requisito del nivel de competencia exigible.

-Al artículo 33. Se sugiere que el título del artículo sea “Plan de formación” y que el apartado 2 sea el primero porque es el que contiene la definición.

-Al artículo 34. Solo tiene un párrafo por lo que sobra la numeración del mismo.

-A la disposición adicional primera. El inciso final es innecesario.



-A la disposición adicional segunda. La examinado el texto del proyecto, se omiten artículos en la relación que figura en la disposición, que a juicio del que emite este informe, tampoco son aplicables a los centros concertados, a modo de ejemplo, los artículos 22, 23, 27. Estos artículos son solo aplicables a los centros docentes públicos.

A la disposición final segunda entrada en vigor. Esta disposición prevé la entrada en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Se establece así una entrada en vigor distinta de la general, ya que no se aplica la "vacatio legis" de 20 días contemplada en el Código Civil.

Dicha previsión no se justifica, por lo que se considera aconsejable mantener la citada regla general del ordenamiento, que posibilita el conocimiento de la norma y la adopción de medidas de adaptación o tránsito hacia la misma con anterioridad a su vigencia.

SEXTO. Naturaleza, competencia en la elaboración y aprobación de la norma.

Se trata de una norma de carácter reglamentario de desarrollo de normativa básica.

El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Consejo de Gobierno, según lo dispuesto en el artículo 36,1 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, debiendo adoptar la forma de Decreto según dispone el artículo 37 de la misma.

En cuanto al procedimiento a seguir es el establecido en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo, principalmente la contenida en su Capítulo V del Título II, y en el título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así, destacan en este procedimiento:

1º) Según dispone el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, con carácter previo a la elaboración del proyecto de reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de:

- a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
- b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
- c) Los objetivos de la norma,
- d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias

Este trámite podrá omitirse cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia, circunstancia que debe motivarse, en su caso, en la memoria propuesta.

En el expediente deben recabarse e incorporarse los informes y documentos siguientes:

1º) incorporación de una memoria normativa comprensiva de los objetivos, conveniencia e incidencia de la regulación que se propone.

2º) La iniciativa de la elaboración de la norma debe ser autorizada por la persona titular de la Consejería con competencias en materia de educación, según el artículo 36.2 de la Ley 11/2003.

3º) Debe recabarse el dictamen del Consejo Escolar de Castilla-La Mancha, en cumplimiento a la previsión contenida en el artículo 13.1.b) de la Ley 3/2007, de 8 de marzo, reguladora de la participación social en la educación en la Comunidad Autónoma.

4º) Debe ser informado por el gabinete jurídico al resultar preceptivo en virtud de lo dispuesto en el artículo 11, apartado a) del Decreto 128/1987, de 22 de septiembre, de organización y funciones de dicho órgano y en el artículo 10.1.a) de la Ley 5/2013, de 17 de octubre, de ordenación del servicio jurídico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,

5º) Informe impacto de género.

6º) Informe impacto sobre la familia, la infancia y la adolescencia..

7º) Si la aprobación de la norma implica gasto en ejercicios futuros deberá solicitarse informe a la Dirección General de Presupuestos previsto en el artículo 22 de la Ley 6/2024, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2025, que establece que "Todo proyecto de disposición de carácter general, así como los



convenios, planes, programas, y acuerdos en los que participen los sujetos contemplados en el artículo 1, apartados b), c) y d), que impliquen gastos o minoración de ingresos en ejercicios presupuestarios futuros, requerirán con carácter previo el informe favorable de la dirección general competente en materia de presupuestos, independientemente de que dichos gastos hayan sido debidamente anotados en el sistema de información económico-financiera TAREA”

8º) Informe de impacto demográfico previsto en la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha, desarrollada por Resolución de 24/02/2022, de la Vicepresidencia, por la que se establecen directrices, criterios y metodologías para la elaboración del informe sobre impacto demográfico en los proyectos de normas, planes y programas de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

El modelo de informe, a cumplimentar por el órgano gestor proponente, se encuentra en el siguiente enlace:

<https://www.castillalamancha.es/gobierno/vicepresidencia/estructura/comretedm/actuaciones/informe-de-impacto-demogr%C3%A1fico>.

9º) Como se prevé la aplicación de esta norma a la etapa educativa de la formación profesional, debe someterse al Consejo de formación profesional de Castilla-La Mancha de conformidad con lo previsto en el artículo 2 de La Ley 1/2001, de 5 de abril, por la que se crea y regula el Consejo de Formación Profesional de Castilla-La Mancha.

10º) Debe solicitarse el dictamen del Consejo Consultivo de conformidad con el artículo 54.4 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, según el cual este último órgano deberá ser consultado en el caso de "Proyectos de Reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las leyes, así como sus modificaciones".

Es cuanto se tiene que informar.

Toledo, a la fecha de la firma electrónica.

EL COORDINADOR DE ASUNTOS JURÍDICOS